

NACIONES UNIDAS

CONSEJO  
ECONOMICO  
Y SOCIAL



GENERAL

E/CN.12/C.1/WG.3/3/Add.1/Rev.1  
3 de agosto de 1960

ORIGINAL: ESPAÑOL

CCMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA  
Comité de Comercio  
Grupo de Trabajo para Asuntos Aduaneros  
Primera reunión  
Montevideo (Uruguay), 1-15 de agosto de 1960

ANTECEDENTES PARA LA IDENTIFICACION DE "GRAVAMENES DE EFECTOS  
EQUIVALENTES A DERECHOS ADUANEROS" Y DE "GRAVAMENES VIGENTES"  
A LOS FINES DE LA APLICACION DEL TRATADO DE MONTEVIDEO

II. Antecedentes para una definición de lo que debe entenderse  
por "gravámenes vigentes" a los efectos del artículo 5  
del Tratado de Montevideo



ANTECEDENTES PARA UNA DEFINICION DE LO QUE  
DEBE ENTENDERSE POR "GRAVAMENES VIGENTES"  
A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 5  
DEL TRATADO DE MONTEVIDEO

I

A los efectos del cálculo de la reducción anual de gravámenes a que se refiere el artículo 5 del Tratado de Montevideo, se presentan con carácter alternativo, como base de deliberación las siguientes definiciones, de lo que puede considerarse como "gravámenes vigentes para terceros países" al 31 de diciembre precedente a cada negociación:

a) Una alternativa sería la siguiente:

Los gravámenes que normalmente aplica cada país miembro a las importaciones procedentes de terceros países bajo la cláusula de más favor  
(por ejemplo, derechos negociados dentro del GATT o en tratados bilaterales no preferenciales).

A este respecto cabe señalar que ninguno de los países actualmente miembros de la zona de libre comercio tiene tratados preferenciales con terceros países, esto es, con países no miembros de la zona. Sin embargo, habría que prever el caso de que se incorporen a la zona países como Cuba (tratado preferencial con los Estados Unidos) o Colombia (tratado preferencial con el Ecuador, en vías de ratificación). ¿Se tomaría el derecho general o el preferencial como punto de partida para las reducciones de derechos dentro de la zona de libre comercio y para el cálculo de la media ponderada?

Para los productos no negociados se aceptaría el derecho general aplicable conforme al arancel aduanero.

De seguirse este camino, no se tomarían en cuenta los derechos reducidos unilateral y temporalmente por un país para un producto dado. Tal sería el caso del derecho reducido o suspendido por Chile por tres meses a la importación de papas, o por la Argentina a la importación de neumáticos, etc.

En otras palabras, de seguirse esta vía no se tomaría como derecho vigente necesariamente el que el país está aplicando efectivamente al 31 de diciembre, sino aquel que debería aplicar según el arancel o, en caso de derechos convencionales, según el convenio respectivo y siempre que se trate de un derecho aplicable a todos los países que gozan del tratamiento de más favor y no preferencial.

/b) Otra

b) Otra alternativa podría ser:

Los gravámenes que efectivamente está aplicando cada país a su importación desde terceros países al 31 de diciembre, aunque sea a algunos productos de derechos reducidos o suspendidos temporalmente.

Este es el criterio adoptado en principio en el Tratado de la EFTA, aunque condicionado a algunas excepciones a que pueden acogerse los países miembros.

Este procedimiento ofrecería algunos obstáculos con respecto a la aplicación del Tratado de Montevideo. El más importante sería que la base para calcular la incidencia de los derechos aplicados a un producto dado podría variar substancialmente de un período a otro, según que el país miembro haya estado o no acordando reducción o suspensión temporal de derechos para ese producto en un 31 de diciembre y no en otro.

Otro inconveniente dimanaría de la dificultad de llevar el control de los derechos efectivamente aplicados en cada país al 31 de diciembre. En efecto, pasados varios meses a veces resulta difícil verificar si un producto estaba en una fecha dada con derechos reducidos o suspendidos.

En cualquier caso la suspensión o reducción de derechos sólo se tomaría en cuenta si se aplicara indiscriminadamente, cualquiera que sea el importador y sin límite de cuota o cupo. Si hubiese reducción o suspensión de derechos para ciertos importadores - para entidades oficiales, por ejemplo, o con sujeción a una cierta cuota - no se tomaría en cuenta.

## II

Cualquiera que sea la alternativa que se adopte como norma general para definir o identificar derechos en vigor, hay algunos problemas específicos que deben ser objeto de esclarecimiento y tal vez resueltos por negociación, a saber:

- a) Cómo considerar derechos modificados - suspendidos o reducidos, y a veces también aumentados - por decretos del Poder Ejecutivo, que tienen en principio el carácter de modificaciones temporales pero que de hecho se mantienen durante largos períodos, inclusive por varios años. Este caso se presenta particularmente en Chile.
- b) Cómo considerar los derechos que se reducen o suspenden dentro de una cuota bastante amplia para abarcar de hecho normalmente toda la

/importación del

importación del producto de que se trate (por ejemplo, trigo en el Brasil), o que se suspenden o reducen si el importador adquiere cierta cantidad de producto nacional (carbón mineral, mineral de plomo, etc., también en el Brasil).

Parecería que si la importación se efectúa normalmente desde cualquier origen bajo ese régimen de liberación o suspensión de derechos, se tendría que tomar en cuenta como derecho vigente para terceros países el derecho suspendido o reducido, pues de otra manera no habría preferencia efectiva para el área. Debería exceptuarse el caso de que para el área la suspensión o reducción de derecho se concediese sin sujetarse a condición de cuota o permiso, de compra del producto nacional similar o de cualquier otra.

### III

La exposición precedente contempla el problema de definir derechos vigentes sólo a los efectos del cálculo de la reducción anual de gravámenes. Por ello se habla de derechos y otros gravámenes vigentes "para terceros países". Un problema distinto es el de determinar los gravámenes que se deben considerar como inicialmente vigentes entre los países miembros de la zona de libre comercio y a partir de los cuales deberán éstos efectuar reducciones.

A este respecto podrían considerarse las siguientes alternativas:

- a) Que dichos gravámenes sean los efectivamente aplicados por los países miembros a su comercio recíproco, ya sea en virtud de tratados bilaterales entre esos países, o de medidas adoptadas unilateralmente (por ejemplo, la no aplicación de algunos recargos cambiarios por parte de la Argentina a importaciones procedentes de países limítrofes). Esto significaría que las concesiones tarifarias preferenciales en vigor entre algunos países continuarían y se extenderían automáticamente a todos los países miembros de la zona, aunque los tratados respectivos dejaran de estar vigentes.

Esta alternativa aseguraría al comercio entre los países miembros de la zona un tratamiento no menos favorable que el que goza en la actualidad. No parecería lógico que al ponerse en vigor un tratado tendiente a liberalizar el intercambio, se diese un paso atrás, poniéndose al intercambio en situación menos favorable de la existente en la actualidad. Tal parecería también ser el sentido y el espíritu del artículo 18 del Tratado de Montevideo.

/La adopción

La adopción de este criterio no significaría en modo alguno que los países que están actualmente dando un tratamiento preferencial, sea bilateral o multilateral, a importaciones procedentes de la zona, quedarán en desventaja por tener que dar forzosamente concesiones importantes y no a través de negociaciones. En efecto, siempre se mediría la importancia de esas concesiones, esto es, se computaría en las reducciones a que están obligados a hacer, con respecto al tratamiento que dan para los mismos productos cuando provienen desde terceros países. En otras palabras, se consolidaría la preferencia existente dentro del área y - a través de la cláusula de más favor - se la extendería a todos los países miembros de la zona, a fin de retroceder en la liberación o preferencia ya logradas. Al país otorgante de esa preferencia se le daría el crédito respectivo.

- b) Que dichos gravámenes sean los que aplican en la actualidad los países miembros del Tratado de Montevideo a terceros países. En este caso se comenzaría como si el comercio intrazonal tuviese el mismo tratamiento que el extrazonal, y las reducciones se negociarían a partir de esos derechos generales.